



Arauca como frontera en disputa: necesidades operativas de las Fuerzas Militares frente al narcotráfico y las economías ilegales

Mayor (EJC) Julián Siabato Rojas

Artículo para optar al título profesional:
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES

Nombre del estudiante	:	Mayor (EJC) Julián Siabato Rojas
Identificación	:	91530423
Programa académico	:	Maestría en Estrategia y Geopolítica
Tutor metodológico	:	DO. Oscar Orlando Porras Rodríguez
Tutor temático	:	CR. (RA) Jesús María Díaz Jaimes
Fecha de entrega	:	25 de agosto de 2025
Extensión	:	6.882 palabras

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Arauca como frontera en disputa: necesidades operativas de las Fuerzas Militares frente al narcotráfico y las economías ilegales

Julián Siabato Rojas ¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: El presente documento analiza la influencia de los actores armados ilegales en la expansión del narcotráfico en el departamento de Arauca, con énfasis en su impacto sobre la seguridad nacional y el control territorial. Se utiliza un método cualitativo, con un enfoque descriptivo y una técnica de análisis documental basada en fuentes institucionales y académicas. El estudio identifica la presencia del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo como principales estructuras armadas en la región, cada una con formas específicas de articulación con el narcotráfico. Los resultados evidencian cómo estos grupos configuran una economía criminal compleja que afecta a la población, socava la legitimidad del Estado y dificulta la acción institucional. Se concluye que cualquier estrategia nacional para enfrentar esta problemática debe contemplar no solo el componente militar, sino también el fortalecimiento de la presencia estatal y el desarrollo social en zonas fronterizas.

Palabras clave: Arauca, narcotráfico, actores armados, frontera, control territorial.

Abstract: This document analyzes the influence of illegal armed groups on the expansion of drug trafficking in the department of Arauca, with a particular focus on its impact on national security and territorial control. A qualitative method is employed, using a descriptive approach and a documentary analysis technique based on institutional and academic sources. The study identifies the National Liberation Army, dissident factions of the FARC, and the Gulf Clan as the main armed structures operating in the region, each with specific forms of involvement in the drug trade. The findings reveal how these groups sustain a complex criminal economy that harms local communities, undermines state legitimacy, and hinders institutional response. The conclusion emphasizes that any national strategy to address this issue must consider not only the military dimension but also the reinforcement of state presence and social development in border regions.

Keywords: Arauca, drug trafficking, armed groups, border, territorial control.

¹ Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en Estrategia y Geopolítica, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. - Contacto: julian.siabato@esdeg.edu.co.

Introducción

En el extremo nororiental de Colombia, sobre la vasta y a veces olvidada frontera con Venezuela, se encuentra el departamento de Arauca, un territorio donde la exuberancia de la llanura, la riqueza cultural y la biodiversidad contrastan con una de las expresiones más complejas de la criminalidad organizada: el narcotráfico. Arauca no solo representa un espacio geográfico de importancia ambiental y estratégica, sino que constituye uno de los escenarios más críticos para la seguridad nacional debido a la confluencia de factores estructurales que han favorecido el arraigo y la expansión de economías ilegales, en particular la producción y tráfico de estupefacientes.

El narcotráfico en esta región se entrelaza con otros fenómenos, como el conflicto armado interno, el contrabando, el reclutamiento forzado de menores, y el desplazamiento masivo. Esta situación se ha desarrollado al amparo de una limitada presencia estatal, una geografía difícil, una frontera porosa y la consolidación de estructuras armadas al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC (GAOr), que han convertido a Arauca en una de sus principales plataformas de financiación y control territorial (Romero, 2018). Desde hace décadas, estos grupos se han disputado corredores estratégicos para el tráfico de droga y armas, beneficiándose de la ausencia de acuerdos binacionales sólidos entre Colombia y Venezuela, así como de la débil articulación interinstitucional del Estado colombiano.

A pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Militares para erradicar cultivos ilícitos, interrumpir rutas de narcotráfico y desarticular laboratorios de procesamiento, los resultados han sido limitados. Según Medina Gallego (2017), el enfoque predominantemente militar ha

sido insuficiente para enfrentar un problema cuyas raíces son también sociales, políticas y económicas. Las operaciones de erradicación, si bien han mostrado resultados en cifras puntuales, no logran modificar de forma estructural las condiciones que permiten la permanencia de estas economías ilegales. En gran parte, esto se debe a la falta de continuidad en las estrategias gubernamentales y a la desconexión entre la acción militar y los programas de desarrollo rural y justicia social, lo cual deja vacíos institucionales que son rápidamente ocupados por actores armados ilegales.

Jaramillo y Restrepo (2015) advierten que la militarización de regiones como Arauca, sin una estrategia clara de consolidación estatal, conduce a lo que denominan "zonas de repliegue", donde los grupos ilegales reconfiguran sus redes de operación. La inestabilidad en esta región se agudiza por las condiciones del terreno, amplias sabanas, ríos caudalosos y pasos fronterizos irregulares, que dificultan la presencia sostenida de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, estos grupos se mueven con facilidad entre ambos países, aprovechando no solo el terreno, sino también la ausencia de acuerdos efectivos de cooperación con Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera de 398 km en Arauca, de los cuales buena parte son incontrolables por vía fluvial y terrestre (DANE, 2023).

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2023) ha documentado cómo, en muchos municipios de Arauca, la economía del narcotráfico se ha entrelazado con prácticas locales y estructuras informales de poder, generando una legitimidad paralela frente a la institucionalidad estatal. El narcotráfico no solo representa una amenaza directa a la seguridad del territorio, sino que ha permeado las dinámicas cotidianas, afectando profundamente el tejido social, económico y ambiental. La siembra de cultivos de uso ilícito ha provocado deforestación, degradación de suelos y contaminación

de fuentes hídricas, a la vez que ha incentivado la dependencia económica de comunidades enteras frente a estas actividades.

En este contexto, resulta fundamental analizar el problema del narcotráfico en Arauca desde una perspectiva estratégica nacional, que supere la visión estrictamente operativa o punitiva. Es imperativo comprender cuáles son los factores de carácter armado que favorecen el desarrollo del narcotráfico en esta zona, considerando que muchas de las condiciones que perpetúan este fenómeno tienen relación con la forma en que se despliegan y articulan las capacidades del Estado en el territorio. La identificación de estas variables permitirá no solo una mejor comprensión del problema, sino también la formulación de estrategias integrales y sostenibles que vinculen seguridad, desarrollo y cooperación internacional.

La presente investigación parte de la premisa de que el narcotráfico en Arauca no puede seguir abordándose únicamente desde la óptica de la erradicación de cultivos o del despliegue militar temporal. Es necesario explorar cómo las debilidades estructurales del aparato de seguridad, desde la movilidad táctica, la cobertura territorial, la inteligencia militar, hasta la interoperabilidad con otras agencias, contribuyen a mantener condiciones favorables para el narcotráfico. De igual forma, se requiere examinar cómo las decisiones políticas y diplomáticas han limitado el accionar estratégico en la frontera con Venezuela, permitiendo que esta región funcione como un enclave criminal.

Por tanto, la pregunta de investigación que orienta este estudio es: ¿Qué factores de carácter militar favorecen el desarrollo del narcotráfico en la frontera de Arauca y Venezuela? Esta pregunta no solo busca problematizar un fenómeno persistente y creciente, sino también justificar la necesidad urgente de replantear las estrategias nacionales de seguridad y defensa en contextos limítrofes. Comprender este problema en su dimensión militar permitirá

fortalecer las capacidades del Estado colombiano para afrontar una amenaza que, más allá de lo local, representa un desafío regional y transnacional de gran envergadura.

Este artículo tiene como propósito analizar las necesidades que afectan a las Fuerzas Militares para combatir el narcotráfico en la frontera entre Arauca y Venezuela, un territorio marcado por la presencia de economías ilegales y estructuras armadas al margen de la ley. Para alcanzar este objetivo general, se propone: identificar los actores armados que intervienen en el departamento de Arauca, considerando su influencia directa en la expansión del narcotráfico; asimismo, se busca caracterizar geográficamente los factores que favorecen a dichos grupos ilegales para el desarrollo de esta actividad ilícita, atendiendo a las particularidades del terreno que dificultan el control estatal; y, finalmente, determinar las capacidades militares con las que cuentan las Fuerzas Militares para ejercer un control efectivo de la frontera, evaluando sus recursos, limitaciones y nivel de despliegue en la región. Estos objetivos orientan el análisis y fundamentan la estructura del presente estudio.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se adopta una investigación de tipo cualitativa, dado que se busca comprender en profundidad las dinámicas sociales, políticas y militares que intervienen en la persistencia del narcotráfico en la frontera entre Arauca y Venezuela, a partir del análisis de discursos, informes y documentos institucionales. El enfoque cualitativo permite explorar fenómenos complejos dentro de sus contextos específicos, sin reducirlos a variables cuantificables, lo cual resulta particularmente pertinente en el estudio de conflictos armados y crimen organizado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el método cualitativo se orienta a interpretar significados, estructuras de poder y relaciones sociales a

través del análisis de narrativas y textos, lo que facilita comprender las necesidades de las Fuerzas Militares frente a un fenómeno multifactorial como el narcotráfico en una zona limítrofe.

El enfoque descriptivo guía el análisis del presente trabajo, en tanto se pretende detallar las condiciones geográficas, institucionales y operativas que inciden en el accionar de los grupos armados ilegales y en la respuesta estatal a través de sus fuerzas de seguridad. Este enfoque se justifica porque, antes de establecer relaciones causales o proponer soluciones, es necesario reconocer y describir con precisión los elementos que configuran el problema. Según Sampieri, Collado y Lucio (2014), una investigación descriptiva permite "especificar las propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos o comunidades"(pág.15), lo cual es esencial en este caso para caracterizar tanto a los actores armados como las capacidades militares desplegadas en el territorio de estudio.

En cuanto a la técnica de recolección y análisis de información, esta será de carácter documental, fundamentada en la revisión sistemática de fuentes primarias y secundarias, tales como informes oficiales de entidades del Estado colombiano (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo), documentos de organismos internacionales (UNODC, ONU, OEA), literatura académica y artículos de análisis provenientes de centros de pensamiento. Esta técnica resulta pertinente dado que permite abordar el fenómeno a partir de información ya existente y validada, lo cual es indispensable para el análisis de un problema tan delicado y multidimensional. De acuerdo con Ruiz Olabuénaga (2012), la investigación documental es clave en estudios cualitativos, pues permite "rescatar, analizar e interpretar críticamente textos, discursos e informes en los que se reflejan tanto la realidad social como las representaciones institucionales del conflicto y la criminalidad" (pág, 58).

Geopolítica criminal en Arauca: presencia armada e influencia sobre el narcotráfico

En el presente apartado se identifican los actores armados que intervienen en el departamento de Arauca, considerando su influencia directa en la expansión del narcotráfico; el departamento de Arauca, ubicado en la región de la Orinoquía colombiana, se ha convertido en una de las zonas más sensibles en términos de seguridad nacional, debido a su compleja geografía, su condición de frontera internacional y la presencia sostenida de actores armados ilegales. Estos grupos han estructurado redes criminales que se nutren del narcotráfico como fuente primaria de financiación, mediante el control de territorios, rutas de tráfico, laboratorios de procesamiento y la cooptación de comunidades locales.

Por su ubicación estratégica, Arauca es un corredor fundamental que conecta zonas productoras de hoja de coca en el centro y sur del país con mercados ilegales internacionales, a través de pasos fronterizos que facilitan el movimiento transnacional de drogas hacia Venezuela y de allí a otros destinos, principalmente en el Caribe y Europa. En este escenario, el análisis de los actores armados que delinquen en el departamento resulta clave para entender las dinámicas del narcotráfico y los retos de seguridad en la región.

El principal actor armado con presencia prolongada y estructura consolidada en Arauca es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo, de inspiración marxista-leninista, mantiene una organización militar rígida y una presencia histórica en la zona desde la década de 1980. El Frente Domingo Lain Sáenz, uno de los más antiguos del ELN, ha establecido su radio de acción en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita y parte de Tame. Su

dominio territorial se ha basado no solo en el poder de fuego, sino también en estrategias de control social, infiltración de organizaciones comunitarias y una estructura de milicias urbanas que cumplen labores de inteligencia y coerción sobre la población (Fundación Ideas para la Paz, 2022).

EL ELN ha negado de manera reiterada su vinculación directa con el narcotráfico, argumentando que su economía se sostiene en la llamada "tributación revolucionaria", es decir, el cobro de extorsiones a empresas, ganaderos, comerciantes e incluso a otras organizaciones ilegales. Sin embargo, múltiples estudios y reportes de inteligencia coinciden en que este grupo ha mutado sus fuentes de financiamiento y ha incursionado activamente en la regulación de cultivos ilícitos, el cobro de "gramaje" por la comercialización de cocaína, así como en el control de rutas y laboratorios en áreas rurales de Arauca.

Según INDEPAZ (2022), el ELN ejerce un papel de intermediario entre campesinos cultivadores y redes de narcotraficantes, garantizando seguridad en los corredores de movilidad, y estableciendo normas de funcionamiento en las zonas de producción. Esta forma de participación, si bien no siempre implica producción directa, sí lo convierte en un actor estratégico del narcotráfico regional. En paralelo, las disidencias de las FARC-EP se han constituido en el segundo actor armado más relevante en Arauca, tras el proceso de paz con esa organización en 2016.

Estas estructuras, que se marginaron del acuerdo o retornaron a las armas posteriormente, han retomado los esquemas de economía de guerra que caracterizaron a las FARC en décadas anteriores. En particular, el frente décimo Martín Villa, adscrito al llamado Estado Mayor Central, ha logrado consolidar presencia en zonas que anteriormente eran disputadas o controladas por el ELN. La confrontación entre ambos grupos ha generado una

reconfiguración violenta del territorio, con enfrentamientos armados, desplazamientos masivos y ejecuciones selectivas, todo ello vinculado al control del narcotráfico como fuente de financiación (Indepaz, 2021).

Las disidencias, a diferencia del ELN, tienen una relación más abierta con el narcotráfico. Han retomado la organización vertical de la antigua guerrilla, estableciendo cadenas de producción que abarcan desde la presión sobre campesinos para sembrar coca, la instalación de laboratorios de procesamiento de base de coca, hasta alianzas logísticas con redes narcotraficantes nacionales y extranjeras. En varios informes se ha documentado su presencia en el sur de Arauca, donde han desplazado a comunidades indígenas y campesinas para instaurar nuevas áreas de cultivo, destruyendo ecosistemas y generando un dominio basado en el terror (Defensoría del Pueblo, 2022). Su accionar no solo tiene un carácter económico, sino también político-militar, en tanto buscan reemplazar al Estado mediante el ejercicio del control social y la imposición de normas de conducta.

A este panorama se suma la injerencia de estructuras criminales de carácter narco paramilitar, como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Aunque su presencia histórica ha estado más centrada en la región del Urabá, Chocó y algunos sectores del Caribe y el suroccidente, diversos informes indican que han extendido su radio de acción hacia los llanos orientales y Arauca, en parte como resultado de alianzas con redes narcotraficantes venezolanas y brasileñas. Estas alianzas responden a la necesidad de consolidar rutas transnacionales seguras para el envío de cargamentos de droga, aprovechando la porosidad de la frontera araucana y la escasa presencia institucional (Indepaz, 2022).

Los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), surgidos tras el proceso de desmovilización de las FARC-EP, representan actualmente una de las principales amenazas para la estabilidad en zonas de frontera como Arauca. Estas estructuras, que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz o que reincidieron en actividades armadas, han mantenido una lógica armada jerarquizada, con proyección territorial y control de economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional (2022), los GAOR han centrado su actividad en corredores estratégicos para la movilidad y comercialización de drogas, empleando tácticas de intimidación a la población, reclutamiento forzado, instalación de artefactos explosivos y confrontación armada con otras estructuras ilegales. En regiones como Arauca, su presencia ha generado disputas violentas por el control territorial y rutas hacia la frontera venezolana, contribuyendo a un entorno de alta inestabilidad y afectación humanitaria.

La interacción entre estos tres actores, ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo, ha configurado una dinámica compleja de competencia, convivencia y conflicto en torno al narcotráfico. En algunos casos, se han establecido fronteras informales que delimitan zonas de influencia, y en otros, la disputa se ha traducido en enfrentamientos armados de alto impacto. Esta situación ha generado un ambiente de zozobra para las comunidades locales, que se ven atrapadas entre la presión de los grupos armados, la presencia intermitente del Estado, y la falta de alternativas económicas viables. Además, el uso de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes del proceso de paz ha escalado, afectando de forma directa el tejido social y la gobernabilidad en la región (Defensoría del Pueblo, 2022).

Cabe resaltar que estos actores armados aprovechan la geografía del territorio para facilitar sus operaciones. La extensa frontera con Venezuela, de más de 270 km fluviales y 123 km terrestres en Arauca, ofrece múltiples pasos irregulares que permiten el tránsito de personas, mercancías y estupefacientes sin control. Los ríos como el Arauca, el Casanare y el Bojabá sirven de corredores naturales, mientras que las sabanas abiertas dificultan el establecimiento de puestos de vigilancia fijos. Esta situación es aprovechada por los grupos armados, que establecen sus bases en zonas rurales de difícil acceso y utilizan tecnologías rudimentarias pero efectivas, como radios de comunicación, campamentos móviles y redes comunitarias de informantes para eludir las acciones de la Fuerza Pública (UNODC, 2021).

Adicionalmente, el vacío institucional ha favorecido la consolidación de estos actores. La ausencia prolongada de presencia efectiva del Estado en muchas veredas y corregimientos ha permitido que los grupos ilegales asuman funciones de autoridad, impartiendo justicia, regulando conflictos comunitarios, imponiendo normas de convivencia e incluso desarrollando formas de "economía local" con base en los cultivos ilícitos. Esta sustitución funcional del Estado erosiona la legitimidad institucional y genera una dependencia estructural de las comunidades hacia los actores armados, dificultando los procesos de desmovilización, reintegración y sustitución de economías ilegales (Fundación Ideas para la Paz, 2022).

Identificar los actores armados que operan en Arauca implica reconocer que el narcotráfico no es una actividad aislada, sino una economía que se entrelaza con estructuras armadas complejas, geografía estratégica, y contextos de debilidad institucional. El ELN, las disidencias de las FARC-EP y el Clan del Golfo representan expresiones distintas de violencia, pero comparten un objetivo común: consolidar el control sobre el territorio y las

rentas derivadas del narcotráfico. Su presencia sostenida amenaza no solo la seguridad regional, sino la soberanía del Estado colombiano, y plantea retos urgentes para las políticas de defensa, desarrollo y justicia en zonas fronterizas. Solo a partir de un diagnóstico preciso de los actores en juego será posible avanzar hacia estrategias de intervención integral, que combinen el accionar militar con la acción social, la inversión pública, y la construcción de legitimidad en territorios históricamente abandonados.

Entre la selva y la frontera: caracterización geográfica de los espacios ocupados

La relación entre el territorio y las actividades ilícitas en Colombia ha sido ampliamente documentada por investigadores y organismos oficiales. Diversos estudios coinciden en que el espacio geográfico es un factor determinante en el surgimiento y la persistencia de ciertas economías ilegales, al influir en dónde se asientan los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y otros negocios ilícitos vinculados al conflicto armado (Gómez, Sastoque & Mantilla, 2019). En efecto, "lo espacial es determinante en el fenómeno de los cultivos ilícitos y las drogas ilegales puesto que orienta y explica el acceso a recursos naturales necesarios, el emplazamiento de plantaciones, el camuflaje de actividades ilegales [y] la construcción de rutas de comercialización" (Gómez et al., 2019, p. 27).

En otras palabras, las características geográficas de Colombia, como su accidentada topografía, vastas selvas tropicales, y largas fronteras poco vigiladas, han sido aprovechadas por los grupos armados ilegales para desarrollar actividades ilícitas (Ríos, Bula & Morales, 2019). Estas condiciones del terreno dificultan la presencia y el control efectivo del Estado, creando "escenarios favorables frente a la disputa con el Estado" en los cuales prosperan

economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando u otras formas de criminalidad (Ríos et al., 2019, p. 120). A continuación, se caracterizan los principales factores geográficos que facilitan dicha dinámica, atendiendo a las particularidades del terreno que obstaculizan el control estatal en distintas regiones del país.

Terrenos montañosos y selváticos: refugio y ocultamiento

Buena parte del territorio colombiano está compuesto por cadenas montañosas escarpadas (la cordillera de los Andes en sus tres ramales) y extensas áreas selváticas en la Amazonía y el Chocó. Estas regiones de difícil acceso han servido históricamente de refugio natural para grupos guerrilleros, organizaciones narcotraficantes y otras bandas ilegales. Las montañas y selvas densas ofrecen camuflaje y protección frente a la vigilancia estatal: la vegetación espesa y la complejidad del relieve impiden la detección aérea de cultivos ilícitos o laboratorios clandestinos, a la vez que dificultan las operaciones terrestres de la fuerza pública (Gómez et al., 2019).

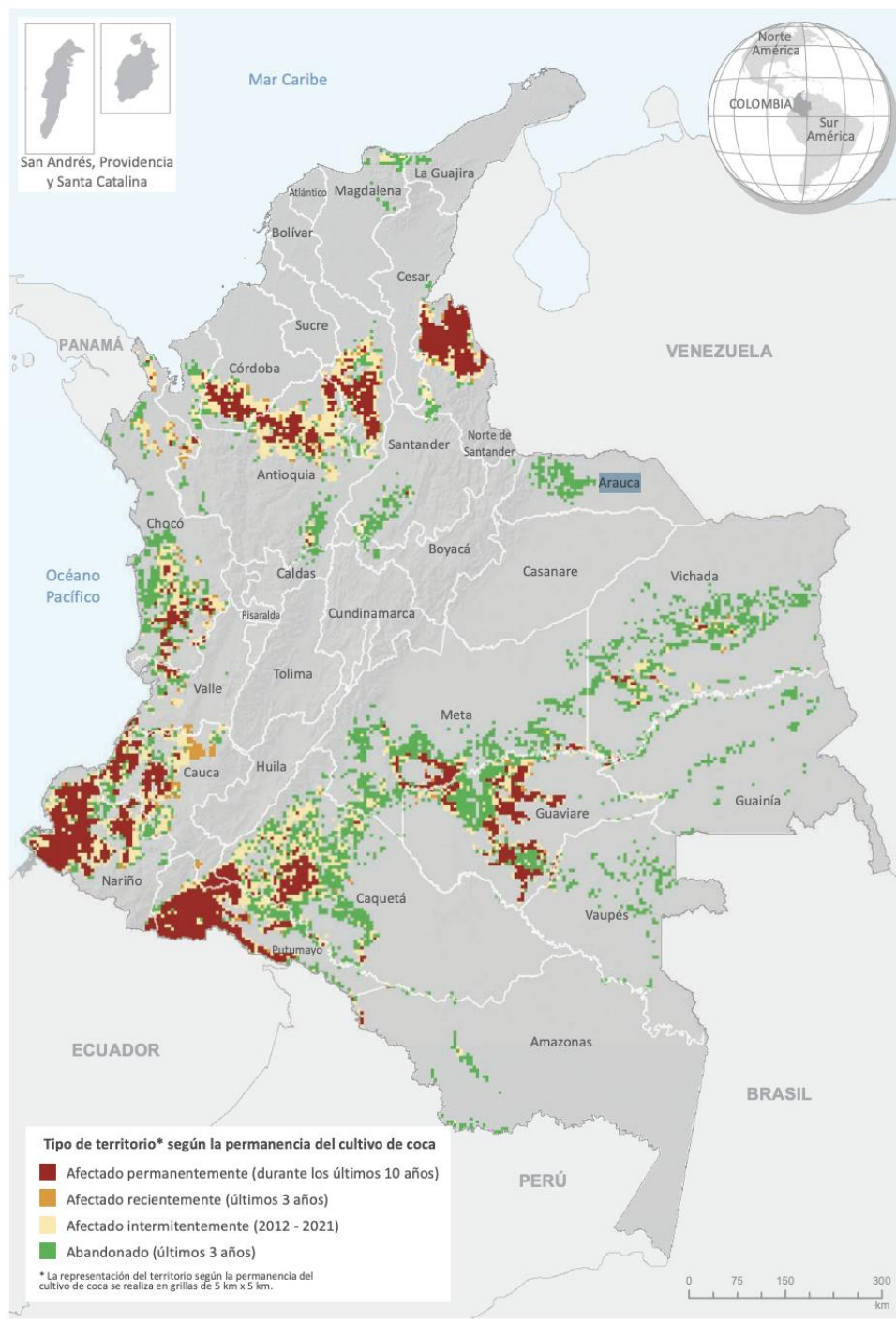
Por ejemplo, la Serranía de la Macarena, las estribaciones de la Cordillera Oriental y amplias zonas del Pie de Monte amazónico han albergado plantaciones de coca y campamentos insurgentes precisamente por sus condiciones geográficas aisladas, con abundante cobertura boscosa y ausencia de vías transitables (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2014). Un informe de la FIP sobre Arauca destaca que en el piedemonte araucano (municipios como Tame, Saravena y Fortul), las características geográficas propician la dispersión de las estructuras guerrilleras sobre la cordillera Oriental, dificultando de igual modo el ingreso de la fuerza pública (FIP, 2014, p. 17). En esos parajes montañosos, los grupos armados ilegales pueden establecer campamentos escondidos, mover sus tropas con

ventaja y evadir enfrentamientos directos con el Ejército, aprovechando que la orografía limita la efectividad de vehículos y equipos militares pesados.

Las selvas tropicales del sur y occidente del país cumplen una función similar. Regiones como el Guaviare, Caquetá, Putumayo y el Chocó biogeográfico combinan baja densidad poblacional con una geografía dominada por bosques húmedos, ríos caudalosos y terrenos anegadizos. Estas condiciones han permitido a organizaciones ilegales ocultar cultivos de coca en claros de la selva, construir laboratorios de procesamiento lejos de centros poblados y establecer rutas clandestinas a través de trochas y ríos sin ser detectados fácilmente (Gómez et al., 2019). La densidad forestal brinda cobertura natural contra la observación aérea, mientras que la falta de carreteras y comunicaciones limita la capacidad de respuesta rápida del Estado.

Por eso, históricamente la producción de coca se ha concentrado en enclaves selváticos y montañosos: según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tres departamentos con extensas áreas selváticas o de piedemonte, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, concentraban en 2022 el 65% de todos los cultivos de coca del país (UNODC, 2023). Estas tres regiones son parte de la periferia andino-amazónica de Colombia, caracterizada por geografía difícil y presencia histórica de grupos armados. En el mapa a continuación se aprecia la distribución de los cultivos de coca, evidenciando su alta densidad en dichas zonas periféricas y de difícil acceso:

Grafica 1



Fuente: Gobierno de Colombia - Sistema de monitoreo apoyado por UNODC (2021).

Densidad del cultivo de coca en Colombia (2021). Las áreas sombreadas más intensamente indican las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos, notablemente en la frontera con Venezuela (Catatumbo, Norte de Santander) y la frontera con Ecuador (Nariño, Putumayo), así como en otras regiones selváticas apartadas.

El control estatal se debilita en estas áreas agrestes. La necesidad de desplazamientos fluviales o a pie para llegar a ciertos parajes retrasa las operaciones militares y reduce la presencia constante de autoridades. Mientras tanto, los actores ilegales conocen el terreno profundamente, lo que les otorga ventaja táctica. Este dominio geográfico se traduce en corredores seguros para transportar insumos (precursores químicos, armamento, alimentos) y sacar los cargamentos de droga procesada sin ser interceptados. Así, los bosques y montañas de Colombia han jugado un rol de santuario para las economías ilícitas, permitiendo que estas prosperen lejos de la mirada del Estado.

Otro factor geográfico crucial es la ubicación de muchas actividades ilícitas en regiones de frontera o en la periferia del territorio nacional. Colombia comparte largas fronteras terrestres con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, que atraviesan selvas, ríos extensos, llanuras y hasta áreas desérticas (en la Guajira) donde la presencia estatal es históricamente limitada. Estas fronteras porosas se han convertido en zonas estratégicas para los grupos armados ilegales, ya que ofrecen varios beneficios: la posibilidad de escapar de la jurisdicción colombiana cruzando al país vecino cuando se sienten acorralados, la opción de establecer rutas de contrabando bidireccionales (ingresando armas, insumos o gasolina barata y sacando drogas u oro ilegal), y la existencia de comunidades binacionales con lazos familiares o étnicos que facilitan ocultarse entre la población local (Defensoría del Pueblo, 2018).

En palabras de un estudio sobre conflictividad fronteriza, en estas áreas suele darse la "conurrencia de fronteras inestables, porosas [y] alejadas del control del Estado" (Ríos et al., 2019, p. 122). Un ejemplo claro es la frontera colombo-venezolana en departamentos como Arauca, Norte de Santander y La Guajira. La debilidad institucional en el lado venezolano durante los últimos años, sumada a la accidentada geografía local (río Arauca y Araquita en Arauca, Sierra de Perijá en el norte, desierto y alta Guajira más al occidente), han convertido esta frontera en un "santuario" para guerrillas y organizaciones narcotraficantes. En Arauca, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC se mueven a través del río Arauca hacia el estado Apure en Venezuela, utilizando "el territorio vecino como zona de retaguardia" fuera del alcance de las autoridades colombianas (Camargo, 2022, p.39).

De ese modo, los actores armados binacionales pueden golpear en Colombia y esconderse en Venezuela, o viceversa, dificultando la persecución efectiva. A su vez, esta frontera permeable facilita la articulación de economías ilícitas transnacionales: los grupos controlan el paso de cocaína hacia Venezuela (que sirve de plataforma para enviar droga a mercados del Caribe o Europa), así como el contrabando de gasolina, ganado y otras mercancías que financian sus operaciones (Human Rights Watch, 2022).

Algo similar ocurre en la frontera sur con Ecuador y Perú, donde extensiones selváticas del Putumayo y la cuenca del río Amazonas permiten mover droga en botes o avionetas a países vecinos con escasa vigilancia fronteriza. De hecho, los departamentos de Putumayo y Nariño, ubicados sobre la línea limítrofe con Ecuador, figuran entre los mayores productores de coca, y sus corredores amazónicos han sido usados para enviar cargamentos hacia Brasil y otros destinos (UNODC, 2023).

La Guajira, en el extremo norte, presenta un caso distinto de geografía fronteriza: es una península semi-desértica colindante con Venezuela y el Mar Caribe, con innumerables caminos informales. Allí proliferaron en el pasado el tráfico de marihuana (bonanza marimbera de los años setenta) y hoy el contrabando de combustibles y alimentos, aprovechando tanto la porosidad de la frontera terrestre como el fácil acceso marítimo a rutas caribeñas. En resumen, las zonas de frontera en Colombia son espacios geoestratégicos para los grupos ilegales -proveen "un corredor ideal para el tránsito de droga, contrabando [y] el uso de la zona como retaguardia" (Ríos et al., 2019, p. 126) precisamente porque el Estado ejerce un control débil o intermitente en estos confines territoriales.

Las particularidades del terreno no solo ofrecen escondite y vías de escape; también proporcionan recursos y condiciones naturales que los grupos ilegales explotan a su favor. En el caso del narcotráfico, la geografía define dónde pueden prosperar los cultivos ilícitos y cómo se estructura toda la cadena productiva. La planta de coca, materia prima de la cocaína, tiene requerimientos agroecológicos específicos: prospera en climas tropicales húmedos, altitudes bajas a medias (0-1.500 msnm) y suelos ricos en nutrientes, generalmente en zonas selváticas o de piedemonte andino. Muchas de las áreas que cumplen con esas condiciones son remotas y han estado históricamente al margen del desarrollo agrícola legal, lo que facilitó su colonización por economías ilícitas (Gómez et al., 2019).

La disponibilidad de fuentes hídricas inmediatas es otro factor fundamental: los ríos y quebradas proporcionan agua para el procesamiento químico de la hoja de coca, y también sirven como vías fluviales de transporte para insumos y productos finales. Por eso, se observa que valles irrigados y cuencas fluviales aisladas, como la del río Caguán en Caquetá, el río Guamuez en Putumayo, o la zona del Catatumbo regada por varios ríos en Norte de

Santander, han sido focos tradicionales de cultivo de coca. La geografía favorece el ciclo completo: brinda terrenos fértiles escondidos y, a la vez, caminos naturales (ríos navegables, trochas en la selva) para sacar la droga hacia los centros de acopio o hacia las fronteras.

No solo la cocaína se beneficia de recursos naturales. Otras economías ilegales también se ven facilitadas por la geografía y la riqueza natural de ciertas regiones. Por ejemplo, la minería ilegal de oro tiende a concentrarse en áreas de difícil acceso donde existen yacimientos aluviales en ríos apartados, casos de las riberas del río Atrato en Chocó o del río Caquetá en el Amazonas, donde las autoridades rara vez patrullan. Del mismo modo, el cultivo de cannabis a gran escala históricamente floreció en la Sierra Nevada de Santa Marta y en serranías de difícil acceso de Cauca y Tolima, zonas donde la altitud y clima eran favorables pero el Estado tenía poca presencia (Ríos et al., 2019).

En cuanto al tráfico de armas y contrabando, las vías fluviales y marítimas han sido cruciales: la costa pacífica, con su mar abierto y pocos puestos navales, permite a las lanchas rápidas transportar droga hacia Centroamérica, mientras que grandes ríos fronterizos como el río Orinoco o el río Amazonas sirven de rutas discreta para el flujo de mercancías ilegales entre países. Así, la disponibilidad de recursos naturales (tierras fértiles, agua, minerales) y la configuración física del territorio (valles, costas aisladas, cuencas hidrográficas extensas) generan oportunidades económicas que los grupos al margen de la ley capitalizan.

Las comunidades locales a menudo participan, por necesidad o coacción, en estas actividades, lo que crea economías dependientes de la geografía ilegal (Defensoría del Pueblo, 2018). Esto refuerza un círculo vicioso: la riqueza natural no controlada por instituciones fomenta economías ilícitas, y estas a su vez fortalecen el control territorial de los grupos armados en esas mismas áreas ricas pero apartadas.

Un elemento transversal a muchos de estos factores geográficos es la escasa infraestructura y la débil presencia estatal en amplias zonas rurales de Colombia. Las dificultades del terreno se ven agravadas por la falta de carreteras, puestos militares, estaciones de policía y demás mecanismos de control permanente del Estado. Muchas regiones cocaleras o conflictivas coinciden con territorios históricamente marginados de la inversión en infraestructura: selvas sin vías pavimentadas, municipios aislados que solo se comunican por río o trocha, veredas donde la única autoridad es el cabildo indígena o el líder comunitario.

Esta realidad ha permitido que los grupos ilegales llenaran el vacío de poder en esas geografías. Por ejemplo, departamentos como Vaupés, Guainía o Vichada -de vasta extensión selvática y con muy pocos caminos- prácticamente han carecido de presencia constante del Estado; en esas condiciones, no es casualidad que operen redes de narcotráfico (pistas aéreas clandestinas, cristalizaderos de cocaína) y minería ilegal de coltán u oro sin mucha interferencia oficial (Ríos et al., 2019). De igual manera, en zonas montañosas como el Cañón de Micay (Cauca) o la región del Nudo de Paramillo (entre Córdoba y Antioquia), la inexistencia de infraestructura vial y la presencia de grupos armados han ido de la mano: el territorio quebrado dificulta construir carreteras, y sin carreteras la fuerza pública entra esporádicamente, lo cual es aprovechado por las disidencias y bandas criminales para ejercer control social y territorial sobre la población (Human Rights Watch, 2022).

La institucionalidad débil se manifiesta también en la ausencia de alternativas económicas legales para las comunidades rurales de esas zonas periféricas. La geografía desafiante ha limitado el desarrollo agrícola o comercial convencional, dejando a muchas poblaciones en la pobreza y la informalidad. En ese contexto, los cultivos ilícitos y otras

economías ilegales se vuelven una de las pocas fuentes de sustento. Los grupos armados, por su parte, se arraigan ofreciendo "protección" o ingresos ligados a la actividad ilícita, generando lealtades locales. Por ejemplo, en Arauca y otras regiones de frontera, el ELN y las ex-FARC han montado estructuras de gobierno paralelo, cobrando impuestos ilegales ("vacunas") a los productores, administrando justicia por mano propia e incluso invirtiendo parte de sus ganancias en obras locales para ganarse a la población (Camargo, 2022).

Todo ello es posible únicamente porque el Estado brilla por su ausencia en lo institucional. La Defensoría del Pueblo (2018) ha advertido que las economías ilegales se fortalecen allí donde confluyen poca presencia estatal, falta de oportunidades lícitas y una geografía difícil, lo cual crea "nuevos escenarios de riesgo" de persistencia del conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz. En síntesis, la combinación de geografía hostil e insuficiente control gubernamental ha establecido verdaderos bolsones de ilegalidad: territorios dentro de Colombia donde impera la ley de facto de grupos ilegales y donde el desarrollo del Estado se ve obstaculizado tanto por la naturaleza como por la violencia.

Capacidades militares para el control efectivo de la frontera en Arauca: evaluación de recursos, despliegue y limitaciones

El departamento de Arauca representa una de las zonas más críticas para la seguridad nacional de Colombia. Su condición fronteriza con Venezuela, su complejidad geográfica, y la presencia de estructuras armadas ilegales convierten a esta región en un escenario estratégico para las Fuerzas Militares, que han sido llamadas a ejercer control territorial, proteger la soberanía y combatir fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y la violencia armada. En este contexto, es indispensable evaluar las capacidades reales con las

que cuenta la Fuerza Pública, particularmente en términos de despliegue humano, medios logísticos, tecnología y articulación institucional.

Históricamente, el Ejército Nacional ha tenido una fuerte presencia en Arauca a través de unidades como la Octava División, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía. Esta división cuenta con la Décima Octava Brigada, cuyas unidades operan específicamente en la frontera con Venezuela. Según el Ministerio de Defensa Nacional (2021), el despliegue en esta región comprende batallones de infantería, fuerzas especiales, unidades móviles de erradicación y apoyo logístico, así como la presencia de la Fuerza Aérea Colombiana en bases de vigilancia aérea táctica y control del espacio.

En términos de capacidad humana, los informes oficiales indican que las Fuerzas Militares en Arauca cuentan con una dotación aproximada de 7.500 efectivos entre Ejército y Policía, incluidos soldados regulares, profesionales y suboficiales, además de personal logístico, ingenieros militares y unidades de inteligencia (Ministerio de Defensa Nacional, 2021). Esta cifra, sin embargo, ha resultado insuficiente ante la extensión territorial y las múltiples amenazas que convergen en el área. La línea fronteriza de más de 350 km con Venezuela, sumada a la existencia de ríos de difícil navegación, pasos clandestinos y zonas selváticas de bajo acceso, exige una fuerza altamente móvil y adaptada al terreno, algo que en la práctica presenta deficiencias. Como lo señala el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército (2022), "la movilidad táctica de las tropas en Arauca se ve limitada por la falta de vías, el deterioro de los recursos de transporte terrestre y la escasa cobertura aérea efectiva" (p. 34).

La infraestructura militar en Arauca cuenta con bases permanentes como las de Saravena, Tame y Fortul, así como con destacamentos móviles que se reubican según

necesidades operativas. No obstante, los informes de la Contraloría General de la República (2020) han advertido sobre limitaciones logísticas estructurales, entre ellas la obsolescencia de equipos de vigilancia, deficiencias en el mantenimiento de helicópteros UH-60 y UH-1N, así como la carencia de drones de largo alcance con capacidad de monitoreo continuo en zonas críticas. Esto limita severamente las labores de inteligencia y vigilancia permanente, cruciales para detectar movimientos de actores armados ilegales, laboratorios de droga o desplazamientos irregulares a través de la frontera.

En cuanto a capacidad tecnológica, el componente de inteligencia estratégica ha sido fortalecido parcialmente con la implementación de sistemas como el SICOES (Sistema de Comando y Control de las Fuerzas Militares) y el apoyo de la inteligencia técnica. Sin embargo, según el Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa (2021), aún persisten vacíos en la integración de inteligencia humana y electrónica, especialmente en sectores rurales sin cobertura satelital o de comunicaciones. Además, los sistemas de vigilancia con cámaras térmicas y sensores en los pasos fronterizos del río Arauca han sido reportados como intermitentes o inactivos debido a fallas técnicas y escaso mantenimiento (Instituto de Estudios Estratégicos, 2021, p. 56).

Uno de los aspectos más sensibles es el despliegue aéreo y fluvial. Si bien la Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado misiones de patrullaje en helicópteros y aviones radar en los últimos años, la cobertura permanente se ve obstaculizada por factores como el clima, la escasez de pistas y la fragmentación del terreno. En lo fluvial, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 52 realiza operaciones sobre el río Arauca, pero el control es parcial, ya que existen más de 80 pasos ilegales identificados a lo largo del curso fluvial, los cuales

son utilizados por grupos armados para cruzar hacia Venezuela con droga, armas o personas (Armada Nacional, 2020).

Otro componente fundamental en la evaluación de capacidades es la articulación interinstitucional, especialmente en contextos limítrofes. En Arauca, los esfuerzos de la Fuerza Pública se complementan con operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), Migración Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sin embargo, diversos diagnósticos como el del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021) han advertido que "la falta de interoperabilidad entre plataformas, las duplicidades en la planeación operativa y la descoordinación en los tiempos de respuesta dificultan la acción unificada del Estado en la frontera" (p. 42). Esto significa que, aunque existan recursos humanos y técnicos disponibles, su impacto se diluye cuando no hay cohesión en la estrategia ni complementariedad efectiva entre agencias.

Un desafío adicional es la presión constante sobre la Fuerza Pública por parte de la población civil. En varios municipios de Arauca, los grupos armados ilegales han consolidado formas de control social mediante intimidación, control de movilidad, administración de justicia paralela y cooptación de liderazgos comunitarios. Esta situación pone a los militares en una posición difícil: deben mantener la seguridad sin afectar la relación con comunidades que muchas veces están atrapadas entre dos fuegos. El Ejército ha implementado estrategias de acción integral, como programas de asistencia médica, ingeniería civil y campañas de acercamiento con la población, pero estas iniciativas requieren continuidad, recursos y protección contra sabotajes por parte de los actores armados (Centro de Investigación en Seguridad y Defensa Nacional, 2022).

En suma, si bien las Fuerzas Militares colombianas mantienen una presencia sostenida y operativa en Arauca, con unidades especializadas, experiencia en combate irregular y conocimiento del terreno, las condiciones actuales ponen en evidencia limitaciones estructurales que dificultan un control fronterizo efectivo. Estas limitaciones se relacionan con el déficit de recursos tecnológicos, las dificultades de movilidad, las carencias logísticas, la dispersión de esfuerzos interinstitucionales y el desafío de operar en un territorio hostil donde los grupos ilegales cuentan con redes transfronterizas, inteligencia local y apoyo logístico extranjero. Superar estos retos exige una revisión integral del modelo de seguridad fronteriza, una mayor inversión en infraestructura táctica, y sobre todo, una estrategia de Estado que combine presencia militar con desarrollo territorial y legitimidad institucional.

Conclusiones

Comprender con mayor profundidad la compleja problemática del narcotráfico en la frontera entre Arauca y Venezuela, a partir de tres dimensiones fundamentales que, articuladas entre sí, revelan el carácter estructural del conflicto y sus implicaciones para la seguridad y soberanía del Estado colombiano. Al identificar los actores armados que intervienen en el departamento de Arauca, se evidenció la presencia consolidada de estructuras ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC-EP y, en menor medida, el Clan del Golfo. Cada uno de estos actores ha desarrollado una forma particular de articulación con las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, ejerciendo control territorial, social y económico en distintos municipios.

Estas organizaciones no solo se financian a través de la cocaína, sino que también generan dinámicas paralelas de gobernanza, cooptan comunidades, y obstaculizan cualquier

intento institucional de estabilización en el territorio. La violencia selectiva, el reclutamiento forzado y los enfrentamientos armados forman parte de sus estrategias para disputar y mantener zonas de influencia clave en rutas de tráfico transnacional.

La caracterización geográfica de los factores que favorecen a estos grupos ilegales permitió evidenciar cómo las particularidades del terreno, relieve montañoso, cobertura selvática, pasos fluviales y fronteras porosas constituyen un componente determinante en la persistencia y expansión de las actividades ilícitas. La geografía no es un elemento neutro, sino una ventaja estratégica para quienes operan al margen de la ley, y una dificultad operativa para el Estado. En las zonas de difícil acceso, con escasa presencia institucional y sin infraestructura básica, los grupos armados han encontrado el escenario ideal para ocultarse, establecer rutas clandestinas y articular redes de producción y transporte de drogas. Las fronteras con Venezuela, en particular, actúan como corredores binacionales que les permiten cruzar impunemente, eludir operaciones de seguridad y mantener vínculos logísticos con actores extranjeros, lo cual refuerza la lógica transnacional del conflicto.

Al determinar las capacidades militares con las que cuentan las Fuerzas Militares para ejercer un control efectivo de la frontera, se concluyó que, aunque existe un despliegue operativo constante en la región, las limitaciones estructurales en recursos, movilidad táctica, tecnología de vigilancia, interoperabilidad institucional y sostenibilidad logística restringen significativamente su efectividad. Las Fuerzas Militares cumplen un papel central en la contención del fenómeno, pero operan bajo condiciones desfavorables: con limitaciones presupuestales, en escenarios de hostilidad geográfica, con apoyo Inter agencial fragmentado y bajo la presión de mantener el respaldo social de comunidades que, muchas veces, son víctimas y a la vez están atrapadas en la economía ilegal. Esto refleja la necesidad de transitar

hacia un modelo de seguridad fronteriza más integral, que combine control militar con inversión social y presencia estatal sostenida.

En conjunto, estos tres componentes analizados permiten cumplir con el objetivo general de este estudio: analizar las necesidades que afectan a las Fuerzas Militares para combatir el narcotráfico en la frontera entre Arauca y Venezuela, un territorio profundamente condicionado por economía: actores armados y un entorno territorial que desfavorece la acción institucional. La evidencia demuestra que el problema no puede abordarse únicamente desde la dimensión armada; requiere comprensión integral del contexto, donde confluyen variables políticas, geográficas, sociales y económicas.

El aporte principal de esta investigación radica en mostrar que el narcotráfico en Arauca no es fenómeno aislado ni coyuntural, sino una expresión territorializada del conflicto armado colombiano alimentado por la desarticulación estatal y favorecido por las condiciones del entorno físico y humano. Este análisis puede servir de base para la formulación de estrategias diferenciadas de seguridad defensa, ajustadas a las características reales del territorio y a la dinámica de los actores ilegales. También subraya la importancia de fortalecer las capacidades del Estado no solo en términos militares sino en su capacidad de gobernar, desarrollar e integrar las regiones históricamente periféricas.

Referencias

Armada Nacional. (2020). Balance operativo del Comando de Infantería de Marina No. 5.

Dirección General Marítima, Bogotá.

Camargo, M. (2022). Arauca: territorio de conflictos y disputas. Universidad de Antioquia.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Centro de Estudios Estratégicos del Ejército. (2022). Diagnóstico de capacidades logísticas del Ejército Nacional en zonas de frontera. Bogotá: Comando del Ejército.

Centro de Investigación en Seguridad y Defensa Nacional. (2022). Capacidades del Estado para el control de territorios en zonas de frontera. Escuela Superior de Guerra.

Contraloría General de la República. (2020). Informe especial sobre capacidades militares en la frontera oriental. Bogotá: Dirección de Defensa y Seguridad.

DANE. (2023). Estadísticas territoriales por departamentos: Arauca. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co>

Defensoría del Pueblo. (2018). Informe especial de riesgo: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el pos-acuerdo. Bogotá: Defensoría delegada para la Prevención de Riesgos.

Defensoría del Pueblo. (2022). Alerta Temprana No. 004 de 2022 sobre la situación de derechos humanos en Arauca. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.

Departamento Nacional de Planeación - DNP. (2021). Evaluación del desempeño interinstitucional en zonas de frontera. Bogotá: Dirección de Seguridad Territorial.

Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2014). El ABC del ELN: contexto, dinámicas y perspectivas. Bogotá: FIP.

Fundación Ideas para la Paz. (2022). Finanzas del ELN: estrategias de control y fuentes de ingreso. Bogotá: FIP.

Gómez, C. Y., Sastoque, T. G., & Mantilla, S. C. (2019). Los estudios sobre el fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en Colombia: una revisión desde los enfoques de la geografía. *Análisis Político*, 97, 24-44.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.* ed.). McGraw-Hill.

Human Rights Watch. (2022). "Los guerrilleros son la policía": Control social y abusos graves por parte del ELN en Arauca y Apure. Nueva York: HRW.

Indepaz. (2021). Informe de presencia y expansión de actores armados ilegales en Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

- Indepaz. (2022). Arauca: disputa armada y redes criminales. Bogotá: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
- INDEPAZ. (2023). Informe sobre presencia de grupos armados ilegales y economías criminales en Colombia. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. <https://www.indepaz.org.co>
- Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. (2021). Sistema de capacidades de defensa y soberanía en regiones fronterizas. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.
- Jaramillo, S., & Restrepo, J. (2015). Zonas de repliegue y control territorial en Colombia: ¿militarización sin consolidación? Fundación Ideas para la Paz. <https://www.ideaspaz.org>
- Medina Gallego, C. (2017). La frontera colombo-venezolana: Una geopolítica de guerra y narcotráfico. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.unal.edu.co>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2021). Libro Blanco de la Defensa Nacional: Fuerza Pública para el siglo XXI. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Ministerio de Defensa Nacional. (2022). Informe sobre amenazas a la seguridad nacional: evolución y dinámica de los Grupos Armados Organizados Residuales. Bogotá: Dirección de Inteligencia Estratégica y Análisis de Riesgo, MDN.
- Pécaut, D. (2008). Las FARC: Una guerrilla sin fin. Grupo Editorial Norma.
- Ríos, J., Bula, P., & Morales, J. (2019). Departamentos de frontera y violencia periférica en Colombia. *Revista Criminalidad*, 61(2), 113-132.
- Romero, M. (2018). Parapolítica y fronteras porosas: El crimen organizado en Arauca. Fundación Friedrich Ebert en Colombia - FESCOL. <https://www.fescol.org>
- Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022 (Informe SIMCI). Bogotá: UNODC - Gobierno de Colombia.

UNODC. (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020-2021. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Colombia.